



## **JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD**

Medellín, catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado	05001 40 03 013 2022 01274 00
Proceso	Acción de Tutela
Accionante	Unión Temporal Prosocial 2021
Accionado	Municipio de Medellín – Secretaría de Inclusión Social – Secretaría de Servicios y Suministros – Secretaría de Hacienda de Medellín
Tema	Derecho de Petición
Sentencia	General: 371 Especial: 359
Decisión	Niega – Hecho Superado

Se procede a resolver la acción de tutela del trámite de la referencia.

### **I. ANTECEDENTES**

**1.1.** El señor Enrique Dávila Cifuentes, actuando en calidad de representante legal de la Unión Temporal Prosocial 2021, interpone acción de tutela en contra del Municipio de Medellín, por la presunta vulneración al derecho fundamental de petición, relatando los siguientes hechos.

Manifiesta que, por parte de la Unión Temporal Prosocial 2021, presentó derecho de petición el día 06 de octubre de 2022 ante la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín, con copia a la Secretaría de Suministros y Servicios del mismo municipio, solicitando dar respuesta a los requerimientos presentados los días 12 de mayo de 2021 y 09 de noviembre de 2021.

Indica que, por parte de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, le informan que dieron traslado de su petición a la Secretaría de Suministros

y Servicios, al igual que a la Secretaría de Hacienda de Medellín, argumentando que son estas Secretarías las idóneas para brindar respuesta a lo requerido.

Que a la fecha de presentar la acción de tutela no había recibido respuesta por parte del Municipio de Medellín al requerimiento realizado mediante derecho de petición del 06 de octubre de 2022, por tal motivo, considera que se le está vulnerando su derecho fundamental de petición, solicitando así, que se le ampare este derecho Constitucional y se ordene al Municipio de Medellín, dar una respuesta inmediata y de fondo al requerimiento realizado.

**1.2** La acción de tutela fue admitida el día 06 de diciembre de 2022, en contra de **Municipio de Medellín – Secretaría de Inclusión Social – Secretaría de Servicios y Suministros – Secretaría de Hacienda de Medellín**, concediéndole el término de dos (2) días a la parte accionada para que se pronuncie sobre los hechos materia de la solicitud, presente las pruebas que requieran so pena de dar aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

**1.3** El día 09 de diciembre de 2022, el **Municipio de Medellín**, a través de su apoderada judicial, la Doctora Paula Andrea Elejalde López, dio respuesta a la acción de tutela, manifestando lo siguiente.

Manifiesta la accionada que, por parte de La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el día 27 de noviembre de 2020 dio aviso de convocatoria a la Licitación pública número 70007091 con un objeto de “Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar” en la cual se presentaron varios oferentes, entre ellos, la Unión Temporal Prosocial 2021.

Indica, que efectivamente el día 07 de octubre de 2022, el señor Enrique Dávila Cifuentes, en representación de la Unión Temporal Prosocial 2021, presentó derecho de petición dirigido a la Secretaría de Suministros y de Servicios de Inclusión Social de Medellín, en el cual solicitó respuesta a la petición de devolución por concepto de la tasa de Pro Deporte y Recreación.

Que el día 30 de noviembre de 2022, la Secretaría de Inclusión Social, emitió concepto en relación al tema de la tasa Pro Deporte y Recreación, en el cual se indicó la obligatoriedad en el cobro de esta tasa para todos los contratos que conformidad con su naturaleza y el nivel al que corresponda la entidad contratante, sean suscritos a partir del 19 de diciembre de 2020 los cuales deberán gravarse de conformidad con los porcentajes establecidos en el Acuerdo 018 de 2020.

Indica la accionante que, con base a este concepto, la Secretaría de Suministros y Servicios de la Administración Municipal de Medellín dio respuesta al derecho de petición, siendo enviada al accionante el día 09 de diciembre de 2022 al correo electrónico [utprosocial2021@gmail.com](mailto:utprosocial2021@gmail.com).

En tal sentido, Solicita la Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín, se declare improcedente la acción de tutela por presentarse un hecho superado al haberse dado respuesta el derecho de petición presentado por el accionante.

**1.4** Conforme a constancia que reposa en expediente archivo (06ConstanciaAccionante), el señor Enrique Dávila Cifuentes, manifestó que recibió respuesta al derecho de petición por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín.

## **II. COMPETENCIA.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2591 de 1991, artículo 32, es competente este Despacho para conocer y decidir respecto de la solicitud de tutela impetrada.

## **III. PROBLEMA JURÍDICO.**

De acuerdo con la situación fáctica puesta de presente en el asunto bajo estudio, se debe determinar si la accionada **Municipio de Medellín** ha vulnerado el derecho fundamental de petición al accionante, al no dar respuesta a la petición radicada el día 06 de octubre de 2022, o si, por el

contrario, con la respuesta aportada por la empresa accionada se dan los presupuestos de la figura del hecho superado por carencia actual de objeto.

#### **IV. CONSIDERACIONES.**

##### **4.1 DE LA ACCIÓN DE TUTELA.**

Conforme al artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, el objeto fundamental de la acción de tutela, no es otro que la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados en la ley.

##### **4.2 DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA (ACTIVA – PASIVA) EN LA ACCIÓN DE TUTELA.**

De conformidad con el artículo 86 de la constitución política “Toda Persona” puede recurrir a la acción de tutela “para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

Conforme lo anterior, la acción de tutela puede ser ejercida por toda persona que considere que le están vulnerando sus derechos constitucionales fundamentales sea nacional o extranjera, natural o jurídica, ciudadano o no, que se halle en el territorio colombiano o se encuentre por fuera y la autoridad o particular que vulneró los derechos fundamentales se encuentre en Colombia. Así pues, puede ser ejercida directamente o por quien actúe a su nombre, bien sea por medio de (i) un representante legal en el caso de los menores de edad, las personas jurídicas, los incapaces absolutos y los interdictos; (ii) mediante apoderado judicial; y (iii) por agencia oficiosa. En

estos tres últimos casos se debe probar la legitimación en la causa por activa.

Como ya se expresó, por mandato constitucional se faculta a todo ciudadano para que en su propio nombre instaure acción de tutela ante una autoridad judicial con el fin de hacer valer sus derechos fundamentales cuando los considere vulnerados o amenazados; dentro del presente caso, el señor Enrique Dávila Cifuentes en calidad de representante legal de Unión Temporal Prosocial 2021, por lo que se encuentra legitimado para interponer la presente acción.

Se tiene, además, la legitimación en la causa por pasiva de la accionada **Municipio de Medellín - Secretaría de Inclusión Social - Secretaría de Servicios y Suministros - Secretaría de Hacienda de Medellín**, toda vez que es la entidad a la cual se le endilga la “presunta” vulneración del derecho fundamental esgrimido por el accionante.

#### **4.3 SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN.**

Este derecho fundamental se relaciona con la garantía de toda persona para presentar peticiones a las autoridades o a organizaciones privadas y obtener pronta resolución por parte de éstas. Su regulación se encuentra en la Ley 1755 del 2015. Como derecho fundamental, éste no se agota en el simple acto de recibir una solicitud. Para dar cumplimiento al mandato constitucional, esta solicitud debe ser resuelta de una manera pertinente a lo que requiere el actor. Como bien lo ha expresado nuestro Tribunal Constitucional: “El derecho de petición comprende no sólo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta para el caso planteado. Asimismo, el derecho referido exige por parte del ente o persona a quien es dirigida la petición el cumplimiento de ciertas obligaciones: en primer lugar, la respuesta debe ser adecuada a la solicitud planteada y en los términos de la misma. En segundo lugar, la respuesta debe ser eficiente para la solución de lo peticionado. En este punto se precisa que el funcionario no sólo debe responder, sino que también debe esclarecer, dentro del alcance de sus medios, el sendero jurídico necesario para lograr la solución del problema. Y, en tercer lugar, la comunicación debe ser oportuna”.

La Corte Constitucional en sentencia T-558 de 2012 señaló lo siguiente: “(...) el derecho de petición no sólo implica la posibilidad de presentar solicitudes a las autoridades estatales o a entes particulares, cuando la ley lo permita, sino, de igual manera, que se dé una oportuna respuesta con sujeción a los requerimientos establecidos en la ley para dicha petición. Es decir, independientemente de que lo resuelto por la entidad sea adverso o no a los intereses del peticionario, la resolución del asunto debe contar con un estudio minucioso de lo pretendido, argumentos claros, que sea coherente, dé solución a lo que se plantea de manera precisa, suficiente, efectiva y sin evasivas de ninguna clase. (...) una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta. Bajo ese entendido, para que la respuesta a la petición se encuentre ajustada a la ley y a lo que la jurisprudencia constitucional ha manifestado al respecto, la misma, además de ser oportuna y de fondo como ya se mencionó, debe ser comunicada al peticionario. (...) En ese sentido, la respuesta que se le otorgue a las solicitudes realizadas en virtud de los anotados derechos, debe ir acorde con los principios antes mencionados. Así las cosas, bajo ese punto de vista no es de recibo exigir a la persona trámites innecesarios o engorrosos, que imponen una carga desproporcionada que no tiene por qué soportar y que se pueden convertir en un obstáculo para la materialización de sus derechos, más aún, cuando la entidad está en la capacidad de evitar tales inconvenientes, para que el peticionario pueda satisfacer de manera idónea sus pretensiones y no verse afectado en sus derechos”.

En Sentencia C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional recordó el alcance del derecho de petición, atendiendo la consagración expresa en la Constitución (art.23), precisando:

“Según abundante jurisprudencia de este Tribunal, el derecho de petición es fundamental y tiene aplicación inmediata, sus titulares pueden ser personas mayores o menores de edad, nacionales o extranjeros, y a través de éste se puede acudir ante las autoridades públicas o ante particulares. Así mismo, el derecho de petición tiene un carácter instrumental en tanto a través de éste se busca garantizar la efectividad de otros derechos constitucionales, como los de información, participación política, libertad de expresión, salud y seguridad social, entre otros.

Así mismo, la Corte ha señalado que su núcleo esencial reside en una resolución pronta y oportuna de la cuestión que se pide, una respuesta de fondo y su notificación, lo anterior no necesariamente implica una respuesta afirmativa a la solicitud. Así pues, se entiende que este derecho está protegido y garantizado cuando se obtiene una contestación oportuna, de fondo, clara, precisa, congruente y la misma es puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de estas características envuelve su vulneración por parte de la autoridad o del particular.

(...) En concordancia con lo expuesto hasta el momento, “puede afirmarse que el ejercicio del derecho de petición no exige formalidades más allá de las que establecen la Constitución Política y la Ley”, y está regulado por unas reglas previstas en el ordenamiento jurídico, las cuales pueden sintetizarse así:

“a) El derecho de petición es determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta a las peticiones debe cumplir con los requisitos de: 1. oportunidad, 2. resolverse de fondo con claridad, precisión y congruencia con lo solicitado y 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos, se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad, el derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la Administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.”.

Igualmente, la sentencia T 058 de 2018, reiteró:

“Ahora bien, la obligación de resolver de fondo una solicitud no significa que la respuesta sea aquiescente con lo solicitado, sino el respeto por el ejercicio del derecho fundamental de petición, es decir, se debe emitir una respuesta clara, precisa, congruente, de fondo, sin que ello signifique necesariamente acceder a lo pretendido. Debe recordarse que es diferente el derecho de petición al derecho a lo pedido: “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él [materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo invocado (...)”. Es decir, la entidad o particular al que se dirija la solicitud está en la obligación de resolver de fondo la solicitud, lo que no significa que deba acceder necesariamente a las pretensiones que se le realicen”.

En conclusión, el derecho de petición no se agota en el simple acto de recibir una solicitud; para dar cumplimiento al mandato constitucional, esta solicitud debe ser resuelta de una manera pertinente a lo que requiere el actor.

#### **4.4 CONFIGURACIÓN DE CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.**

La Honorable Corte Constitucional en sentencia T- 013 de 2017, MP. ALBERTO ROJAS RIOS, precisó sobre el particular:

“(…) No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.”

En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz.

En ese orden, si la acción de tutela busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

En cuanto al hecho superado, esta Corporación ha considerado que esa situación “no conduce a declarar la improcedencia de la acción, pues la Corte Constitucional puede estudiar el fondo del asunto para evaluar si hubo vulneración de las garantías superiores, en virtud de la función de pedagogía constitucional que también realiza a través de los fallos de tutela.

Si bien, en estos eventos no se emiten ordenes ante la ineficiencia de las mismas, si la decisión proferida por el juez de tutela contraría los postulados constitucionales, la Corte debe revocarla”. (...)

En Sentencia T- 512 de 2015, la Sala Primera de Revisión estableció que:

“9. Cuando la presunta vulneración o riesgo fue superado con la satisfacción o salvaguarda de las garantías invocadas, se presenta una carencia de objeto por hecho superado.

10. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, ante un hecho superado, no es perentorio para los jueces de instancia, pero sí para la Corte Constitucional en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección fue solicitada y el tipo de vulneración al que fueron expuestos.

Esto, sobre todo, cuando considera que la decisión debe incluir observaciones sobre los hechos del caso, por ejemplo, llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición. En todo caso, el juez de tutela, independientemente de la instancia en la que conozca de la acción, debe demostrar que existió un hecho superado antes del momento del fallo. (...)

En conclusión, la carencia actual de objeto se presenta durante el trámite del proceso por hecho superado cuando la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados se supera, en estos casos no es necesario el pronunciamiento de fondo por parte del juez, salvo que se requiera precisar al agente transgresor que su acción u omisión fue contraría a los derechos constitucionales.”

#### **4.5 CASO CONCRETO.**

Sea lo primero indicar, que el señor Enrique Dávila Cifuentes, en calidad de representante legal de Unión Temporal Prosocial 2021, interpone acción de tutela señalando como hecho vulnerado del derecho fundamental de

petición ante la ausencia de un pronunciamiento claro, congruente y de fondo respecto de la petición incoada el día 06 de octubre de 2022, ante la Secretaría de Inclusión Social - Secretaría de Servicios y Suministros del Municipio de Medellín, solicitando dar respuesta a los requerimientos realizados por el accionante los días 12 de mayo de 2021 y 09 de noviembre de 2021.

Por su parte, **el Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios**, en la respuesta a la acción de tutela manifiesta que el día 09 de diciembre de 2022, dio respuesta al derecho de petición presentado por el accionante Enrique Dávila Cifuentes, indica que dicha respuesta fue enviada al correo electrónico [utprosocial2021@gmail.com](mailto:utprosocial2021@gmail.com), dirección electrónica referenciada en el escrito de tutela para notificaciones judiciales.

Conforme a constancia que antecede (06ConstanciaAccionante) el despacho tomó contacto con el señor Enrique Dávila, quien manifiesta que efectivamente recibió respuesta por parte del **Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios** al derecho de petición presentado el día 06 de octubre de 2022.

En ese orden de ideas, se advierte que se ha configurado un hecho superado, toda vez que hubo cesación de la vulneración del derecho de petición, esto en el momento en que se da respuesta a lo solicitado el día 06 de octubre de 2022, como consecuencia de la desaparición del hecho que amenazaba el derecho invocado, tal y como lo ha sostenido en reiteradas ocasiones la jurisprudencia constitucional, de modo que, si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecho, la decisión que pueda emitir el juez de tutela no tendría ninguna resonancia frente a la posible acción u omisión de la accionada y en este caso, es claro que a la parte accionante se le resolvió por parte de la accionada, el fundamento de su pretensión de tutela observando este Despacho que ha cesado la vulneración al derecho de petición alegado.

## V. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la suscrita **Juez Trece Civil Municipal de Oralidad de Medellín**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución Política,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: Negar** el amparo constitucional al derecho fundamental de petición invocado por el señor Enrique Dávila Cifuentes, en contra de **Municipio de Medellín - Secretaría de Inclusión Social – Secretaría de Servicios y Suministros – Secretaría de Hacienda**, por haberse configurado el **hecho superado**.

**SEGUNDO: Notificar** a las partes la presente providencia e informarles que puede ser impugnada al correo electrónico [cmpl13med@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:cmpl13med@cendoj.ramajudicial.gov.co). En horarios de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm; En caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase inmediatamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión:

**NOTIFÍQUESE**

**PAULA ANDREA SIERRA CARO**

**JUEZ**

**EJQ**

Firmado Por:  
Paula Andrea Sierra Caro  
Juez  
Juzgado Municipal  
Civil 013 Oral  
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **71b2c1414c94cdc54ce6325b0bb31a76e0fa8060e69f111717ecb05b954fd8a4**

Documento generado en 14/12/2022 03:47:06 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**